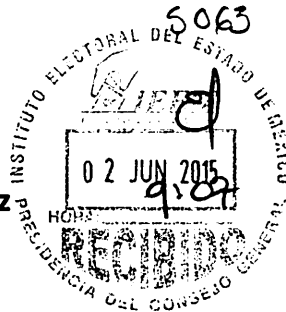


Toluca, México, 01 de junio de 2015.

Oficio No. IEEM/CE/PTP/488/2015

**Lic. Pedro Zamudio Godínez**  
Consejero Presidente



En atención a su amable oficio de contestación con No. IEEM/PCG/PZG/1621/15, respecto de la presunta reunión de servidores electorales con un dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, por medio del presente me permito realizar las siguientes consideraciones de hecho y derecho.

En mi escrito, de ninguna manera, solicité un procedimiento sancionador fuera del marco normativo, lo que pedí, apegado, entre otros, al principio de legalidad, implicaba que usted en su calidad de Consejero Presidente del Consejo General del IEEM, determinara lo que legalmente procediera, como es el caso de solicitar ante la Contraloría General del Instituto, el inicio del procedimiento legal correspondiente y la emisión de la "acción o medida cautelar" que legalmente procediera, por supuesto fundado en la ley aplicable y respetando en todo momento el debido proceso.

Enfatizo, no existe frase alguna en mi escrito, que prejuzgara sobre la responsabilidad de funcionario alguno, ni que implicara dejar de aplicar los supuestos procesales previstos en el derecho administrativo sancionador, tal como le preciso a continuación.

La transparencia y el respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales en todo sistema democrático, para quienes laboramos en órganos electorales, la coherencia entre nuestro actuar y los principios institucionales debe ser acción cotidiana, por lo que resulta inconsistente que se interprete una solicitud para garantizar principios, con una petición para violentar derechos.

Comprometida con garantizar los derechos de las personas, en nuestro régimen democrático, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son fundamentales para un sano desarrollo democrático y como tal mi solicitud es apegada a la legalidad, coherente con el debido proceso y no vulnerando derechos ciudadanos.



Cierto es lo que usted expone en su oficio respecto del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 197 del Código Electoral del Estado de México, pero derivado de su omisión del artículo 476 del Código Electoral, lo comparto textual: **“El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras”.**

Lo anterior, se relaciona con el párrafo cuarto de la Constitución Local que establece: **“El Instituto Electoral del Estado de México contará con una Contraloría General adscrita al Consejo General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos que este ejerza y conocerá de las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.”** Lo mencionado refuerza mi petición, respecto del tema en comento, y deja fuera de discusión que se vulneren derecho o principio alguno a los servidores públicos.

Esta Consejería no es omisa respecto de la normatividad que regula el procedimiento administrativo sancionador, el cual se aplica de manera supletoria al ámbito electoral, y en ese sentido es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la que en su artículo tercero menciona a los autoridades competentes para aplicarla y en su fracción VII menciona al Instituto Electoral del Estado de México.

Ahora bien, el Código de Procedimientos Administrativos en su Capítulo Segundo del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 144 menciona lo siguiente:

**“Artículo 114.- El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad administrativa competente, en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables. Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En esta etapa no se aplicarán las formalidades de la garantía de audiencia previa.”**

Del artículo plasmado, se deja claro la posibilidad legal de que los servidores electorales que presuntamente sostuvieron una reunión con dirigentes partidistas, pueden ser separados de sus funciones, lo cual no implica que sean suspendidos de su empleo, sino que pudieran ser reasignados en otra área del Instituto, lo trascendental, es tomar las medidas que establece la normatividad, para efecto de



salvaguardar el proceso electoral y no poner en duda el actuar de la autoridad electoral.

No obstante que, en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, existe el presupuesto normativo para la suspensión provisional de cualquier servidor público, la intención de mis ocurso, no es el prejuzgar conducta alguna, por lo que insisto, la pretensión de mi escrito es la de garantizar los principios rectores del Instituto, salvaguardar los derechos laborales del personal del Instituto, ya que, en ningún momento, solicité la suspensión de su trabajo, sino de las actividades que en este momento tienen encomendadas.

La legislación aplicable prevé los mecanismos mediante los cuales la Presidencia del Consejo General pudiera atender las peticiones de mi oficio No. IEEM/CE/PTP/485/2015, lo anterior, sin vulneración a derecho humano alguno, y sí previniendo una presunta irregularidad en el proceso electoral. Corresponde a usted, en uso de sus facultades legales, gestionar lo planteado ante el órgano interno de control de este Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones como Consejero Presidente.

Sin otro particular, le mando un cordial saludo.

"Tú haces la mejor elección"

A t e n t a m e n t e



**Mtra. Palmira Tapia Palacios**

Consejera Electoral  
y Presidenta de la Comisión de Organización

C.c.p. M. en A. P. Francisco Javier López Corral. Secretario Ejecutivo. Para su conocimiento. Presente.  
Lic. Alma Patricia Sam Carbajal. Directora Jurídico-Consultiva. Para su conocimiento. Presente.  
Mtro. Ruperto Retana Ramírez. Contralor General. Para su conocimiento. Presente.  
Lic. Javier Rivera Escalona. Representante del PRD ante el Consejo General. Para su conocimiento. Presente.